

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 35**  
**O R D I N A R I A**

**MARTES 17 DE MARZO DE 2009**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del martes diecisiete de marzo de dos mil nueve, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar Sesión Pública Ordinaria, los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia abrió la sesión y el Secretario General de Acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**APROBACIÓN DE ACTA**

Proyecto del acta relativa a la Sesión Pública número Treinta y cuatro, Ordinaria, celebrada el jueves doce de marzo de dos mil nueve.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

## VISTA DE ASUNTO

Asunto de la Lista Ordinaria Dos de dos mi nueve:

III.- 2/2009 y  
su acumulada  
3/2009,

Acciones de inconstitucionalidad números 2/2009 y su acumulada 3/2009, promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y Diputados Integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco en contra del Congreso y del Gobernador de esa entidad federativa, demandando la invalidez del decreto 099 por el que se expidió la Ley Electoral del Estado de Tabasco y se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad con sus subsecuentes reformas y adiciones, publicado en el Periódico Oficial estatal el doce de diciembre de dos mil ocho, en especial los artículos 21, párrafo primero, 22, párrafo segundo, 29, párrafo último in fine, 33, párrafo primero in fine, 34, 69, 70, párrafo segundo y tercero, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 84, 106, 109, párrafo último, incisos a) y b), 113, párrafo penúltimo, 130, párrafo primero, 134, párrafo segundo, 149, in fine, 173, 205, 219, párrafo penúltimo, 223, párrafo final, 310, 313, 318, 325, párrafo octavo, 326, párrafo segundo, 336, párrafo tercero, fracciones I y III, y 346, párrafo segundo, fracciones II y III. En el proyecto formulado por el señor Ministro Gudiño Pelayo se propone: “PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas a que este expediente se refiere. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 26, 29, primer y

último párrafos, 36, segundo párrafo, 68, fracciones II a IV, 70, primer párrafo, 72, primera parte, 73, 74, 76, párrafo tercero, 80, segundo párrafo, 82, 83, 84, 105, 130, párrafo primero, 173, 219, penúltimo párrafo, 325, párrafo octavo, 326, párrafo segundo, 336, párrafo tercero, fracciones I y III, 346, párrafo segundo, fracciones II y III, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. TERCERO.- Se declara la invalidez de los artículos 19, 21, párrafo primero, 22, 23, 24, 25, 28, fracción II, incisos a) y b), 34, 69, último párrafo, 70, segundo y tercer párrafo, 75, 76, párrafos primero y segundo, 78, 80, primer párrafo, 106, 113, párrafos primero, segundo y cuarto, 223, último párrafo, 310, fracción VIII, 313, fracción II, 318, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 33, párrafo primero, 68, fracción I, 72, 109, último párrafo, incisos a) y b), 130, primer párrafo, 137, fracción XIII, 149, párrafo cuarto, 199, segundo párrafo, 205, primera parte, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en las porciones normativas que se precisan en el último considerando de esta sentencia. QUINTO. Publíquese esta ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.”

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la consideración del Tribunal Pleno el tema relativo al acceso a tiempos oficiales en radio y televisión para los partidos

políticos, páginas de la páginas de la ciento noventa y dos a la doscientos cuarenta y uno, que sustenta la propuesta contenida en los Puntos Resolutivos Tercero, de declarar la invalidez de los artículos 70, párrafos segundo y tercero, 75, 76, primer y segundo párrafos, 78, 80, primer párrafo y 113 párrafos primero, segundo y cuarto; y Cuarto, de declarar la invalidez de las porciones normativas de los artículos 68, fracción I, y 205.

En los términos consignados en la versión taquigráfica, el señor Ministro Azuela Güitrón, después de precisar las diferentes posturas que se han sostenido, manifestó estar en contra del proyecto, no porque la materia electoral se rija por una ley marco, sino porque ésta tiene aspectos de rango constitucional, de rango federal sujetos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos en Materia Electoral y de rango local sujetos a la Legislación de los Estados de la República. Además, para ejemplificar los términos en los que la Constitución General remite a leyes marco, a la legislación federal o a la legislación local, hizo referencia a lo establecido en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 17 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente, el señor Ministro Azuela Güitrón abordó el análisis de las Bases I y II del artículo 41 constitucional, precisando que al hacerse referencia “a la ley” debe entenderse que en el caso de cuestiones federales, la ley federal será la aplicable, mientras que la ley local será

para cuestiones locales. En esos términos, tratándose del inciso b) del Apartado A de la Base III, del propio numeral, consideró que, al remitirse a lo que “determine la ley”, también debía distinguirse entre la ley federal o la ley electoral local, dependiendo de la naturaleza del proceso electoral respectivo.

En cuanto al Apartado B de la mencionada Base III, consideró que la ley a la que se remite es la estatal, dado que se está refiriendo a procesos electorales locales.

En cuanto a la Base IV, también debe entenderse que al hacer referencia a la ley, se comprende a la federal para aspectos federales y a la local para aspectos locales.

Lo anterior, sostuvo, es coherente con lo previsto en la fracción IV del artículo 116 constitucional al señalarse en aquélla que las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que los partidos políticos accedan a la radio y la televisión conforme a las normas establecidas en el Apartado B de la Base III del artículo 41 constitucional.

Además, consideró que en materia electoral no se puede estimar que existan leyes marco, tal como deriva de la interpretación del artículo 73 constitucional.

Posteriormente, el señor Ministro Góngora Pimentel mencionó que en la jurisprudencia de rubro: “ESTATUTO DE

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JUNTO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, INTEGRA UN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL”, se manifestó disidente únicamente en relación con el estudio relativo a los temas de legitimación y de fondo, toda vez que siempre ha apoyado la figura del bloque de constitucionalidad para los casos en que es aplicable, lo que no sucede en el presente asunto. Señaló que el artículo 70 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco es constitucional, dado que de su interpretación integral, se advierte el reconocimiento del Instituto Federal Electoral como la única autoridad para la administración del tiempo que corresponda al Estado en materia de radio y televisión. En cambio, si se reconoce que el Instituto Federal Electoral es la autoridad que determina en forma definitiva lo relativo a la distribución y administración de los tiempos oficiales de radio y televisión en materia electoral, consideró estar a favor del proyecto en el estudio que realiza de los demás artículos, dado que se debe partir de una interpretación que se concentre en determinar las competencias derivadas de la Constitución Federal, en materia de regulación, distribución y administración de los tiempos oficiales de radio y televisión para la materia electoral, para la autoridad electoral federal y las autoridades electorales locales.

Además, de la interpretación de los artículos 41, Base III, Apartados A, B y C, en relación con el 116, fracción IV,

inciso i), constitucionales, se desprende que la Constitución General contempla la intervención de las autoridades federales y locales en materia de radio y televisión en tiempos oficiales en sus respectivas competencias, las cuales, en el caso de las entidades federativas, tienen el deber de garantizar el acceso de los partidos políticos a los tiempos de radio y televisión, sin que esto implique que tengan la facultad de regular lo relativo a la distribución y administración definitiva de los tiempos oficiales en materia de radio y televisión, lo que es materia federal. De ahí que las autoridades electorales locales tengan la facultad de presentar propuestas de pautas, formas de distribución y administración de los tiempos oficiales, sin que ello implique interferir con las facultades del Instituto Federal Electoral.

En ese orden de ideas, señaló que aun cuando la Ley Electoral del Estado de Tabasco intentó incorporar algunos de los citados artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cierto es que tal adaptación o reincorporación se hizo con fines diferentes de los establecidos y reconocidos en este Código, pues el Legislador local determinó que dicho ordenamiento únicamente se refiere a la materia federal, destacando que, de permitirse al legislador local legislar sobre los tiempos de radio y televisión en materia electoral local, se invadiría la esfera federal, ya que en las leyes locales únicamente pueden regularse aspectos de propuestas, de pauta y administración de los tiempos oficiales de radio y televisión

que garanticen el acceso de partidos políticos a estos medios.

En ese sentido, el señor Ministro Góngora Pimentel reiteró su posición en el sentido de que el artículo 70 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco en su interpretación integral no puede considerarse inválido; sin embargo, en los demás preceptos señaló compartir la propuesta del proyecto.

Por su parte, el señor Ministro Valls Hernández, en relación con el tema de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión para los partidos políticos a que alude el Considerando Séptimo del proyecto, se manifestó a favor de las consideraciones del proyecto, con excepción de lo relativo a los argumentos que estiman infundado el establecimiento de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral Estatal, en virtud de que, tratándose de infracciones derivadas del uso de tiempos en radio y televisión es una facultad exclusiva del Instituto Federal Electoral seguir el respectivo procedimiento sancionador en el caso de faltas relacionadas con el uso de tiempos en radio y televisión, por lo que debe quedar claro que ante faltas de esa naturaleza, el organismo de carácter local no puede seguir el referido procedimiento; en todo caso, podrá recibir las quejas y denuncias correspondientes a esa materia para hacerlas del conocimiento de la autoridad federal.



El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia puntualizó que en el párrafo primero del artículo 70 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, se reconoce expresamente que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que le corresponda, mientras que en el párrafo segundo que se propone declarar inconstitucional, se señala que el Instituto Estatal establecerá de común acuerdo con el Instituto Federal Electoral, las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir los partidos políticos, siendo necesario que al fijar el alcance de este párrafo se tome en cuenta lo indicado en los artículos 76, párrafo tercero y 78, párrafo tercero, de la propia Ley Electoral, los que reconocen que será el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral el que autorice la pauta respectiva.

Además, mencionó que en el artículo 80 el instituto estatal por conducto del Instituto Federal Electoral hará uso del tiempo en radio y televisión que le corresponde, mientras que el instituto estatal propondrá al Instituto Federal Electoral las pautas de transmisión de sus mensajes conforme al tiempo que le sea asignado. En ese tenor, sostuvo que la interpretación integral de los referidos numerales debe llevar a concluir que la facultad prevista en el diverso 70, es de coadyuvancia, es decir, la administración de estos tiempos se desdobra en asignación de tiempos, distribución de tiempos y pautado, lo que en materia electoral federal

corresponde al Instituto Federal Electoral, mientras que en materia estatal, dada la necesidad de contar con reglas estatales que atiendan a lo local, es comprensible que puedan variar ligeramente de las federales, por lo que si para la asignación de tiempos federales se tomará en cuenta el resultado de la última elección de diputados federales, para las locales se requerirá acudir al resultado de la última elección de diputados locales, tomando en cuenta que son los institutos estatales electorales los que tienen bajo su resguardo la información de los comicios estatales.

En ese tenor, manifestó que votaría en contra del proyecto, en virtud de que las respectivas declaraciones de invalidez descansan en una supuesta invasión de esferas de la autoridad local a la federal.

El señor Ministro Azuela Güitrón destacó que en relación con el acceso a la radio y la televisión, algunas fracciones son confusas y se basan en remisiones, mientras que otras son muy claras. Mencionó que el inciso j) de la fracción IV del artículo 116 constitucional obliga al legislador local a establecer en la Ley Electoral lo relacionado con reglas de precampañas y campañas electorales y las sanciones para quienes las infrinjan. Además, ese inciso hace una remisión a las normas establecidas en el Apartado B de la Base III del artículo 41 constitucional, el cual dispone que para fines electorales, en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que

correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo que determine la Ley, facultando al Instituto Federal Electoral tanto en lo federal como en lo local, mientras que el Apartado C dispone que la distribución de los tiempos entre los partidos políticos incluyendo a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el Apartado A de la misma Base y lo que determine la Legislación aplicable; es decir, a lo que se regula en el ámbito federal.

En ese orden de ideas, se manifestó en contra del proyecto, al estimar que la Ley de Tabasco no invade ninguna esfera de la Federación, ya que reconoce la participación del Instituto Federal Electoral.

Por su parte, el señor Ministro Cossío Díaz consideró que el artículo 70, párrafo tercero, de la normativa impugnada, al señalar “establecerá de común acuerdo”, está reconociendo al Instituto Electoral Local un estatus que constitucionalmente no le corresponde, a diferencia de lo que sucede con lo señalado en los artículos 76 y 78 de la propia normativa, en la inteligencia de que considerar a la expresión “establecerá” como “propondrá” genera dificultades por el principio de certeza electoral garantizado en el artículo 116 constitucional, debiendo tomarse en cuenta que la respectiva declaración de invalidez trascendería a futuros procesos electorales y permitiría

purgar una expresión que otorga al Instituto Electoral del Estado de Tabasco una posición jurídica que no corresponde a las autoridades estatales.

A continuación el señor Ministro Aguirre Anguiano recordó que un convenio es un acuerdo de voluntades, de manera que se necesita ser parte, por lo que consideró que existe un grave problema en el párrafo tercero del artículo 70 impugnado porque convenir implica acordar. A pesar de lo anterior pudiera realizarse su interpretación conforme, siempre y cuando se entienda que el acuerdo respectivo será conforme a lo que disponga el Instituto Federal Electoral.

Posteriormente, la señora Ministra Luna Ramos señaló que si se toma en consideración que el Instituto Federal Electoral es el facultado para asignar, distribuir y pautar, y que los procesos electorales locales tienen sus propias especificidades, tendría el órgano local que intervenir para coadyuvar con el Instituto Federal Electoral con la finalidad de realizar una adecuada administración y distribución.

En esos términos, consideró que el problema radica en la redacción de algunos artículos, puesto que si el Instituto Federal Electoral es el único facultado constitucionalmente para administrar los tiempos en radio y televisión, el Instituto Electoral local se convierte automáticamente en un coadyuvante del Instituto Federal Electoral, para que pueda

llevar a cabo esta función establecida constitucionalmente. Por ello, si los numerales impugnados señalan que el Instituto estatal acordará los documentos técnicos que servirán de base para celebrar el convenio; ello implica que el Instituto Electoral local no es simplemente un coadyuvante, sino que se le reconocen de manera específica las mismas facultades que al Instituto Federal Electoral. En ese tenor, podría entenderse que se establece la misma facultad tanto al órgano federal como al local, cuando la Constitución dispone que se trate de atribuciones del órgano federal.

A pesar de lo anterior, manifestó no tener inconveniente con una interpretación conforme del referido artículo 70, en la cual se concluya que el Instituto Electoral Estatal tiene la posibilidad de coadyuvar para que el Instituto Federal Electoral cuente con los elementos para distribuir y asignar los mencionados tiempos de radio y televisión.

Por lo que se refiere a lo establecido en el artículo 75 de la ley electoral impugnada destacó que en dicho numeral se otorga al Instituto Electoral Local una facultad de distribución de tiempos de radio y televisión que constitucionalmente corresponde al órgano federal. En cuanto al diverso 76 de la normativa impugnada, destacó que en este numeral se confiere la facultad de asignar tiempo al Instituto Estatal Electoral; a su vez, el artículo 78 sí reconoce la coadyuvancia del organismo local.

En ese contexto consideró su conformidad con realizar una interpretación conforme al tenor de la cual se determine de manera genérica que todos aquellos verbos cuando se refieren a establecer, asignar o distribuir, deben entenderse a una proposición o a una coadyuvancia, ya que el único facultado para llevar a cabo la asignación, distribución y pautado en tiempos de radio y televisión, es el Instituto Federal Electoral.

Más adelante, el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que no se había abordado lo relativo a la impugnabilidad de las decisiones de los Institutos, estatal y federal, tratándose de distribución de tiempos y pautado de mensajes políticos en favor de los partidos.

Estimó que, conforme a la normativa impugnada, la Comisión de Radio y Televisión del Consejo Estatal, como órgano auxiliar del Instituto Estatal Electoral, elabora una propuesta técnica, la eleva a la aprobación del Instituto Federal Electoral; posteriormente, de común acuerdo con el Instituto, se determinan las pautas y se da cumplimiento a los artículos 76 y 78, respecto a que todos estos tiempos sean aprobados por el Instituto Federal Electoral. De esta manera, los recursos que procedan de los partidos políticos serán de conocimiento de la autoridad estatal y no del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque de lo contrario se provocaría la intervención de este

Tribunal para el conocimiento de estas cuestiones del proceso electoral local sin intervención alguna de los órganos de control estatales.

En relación con las anteriores intervenciones, el señor Ministro Franco González Salas recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vincula al legislador local a sujetarse a los criterios establecidos en la Base III del artículo 41 constitucional, no al texto literal de lo establecido en esa Base, pues es necesario adaptar aquéllos a la realidad de la entidad de que se trate. Así, la legislación del Estado de Tabasco solamente incorpora al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en puntos específicos en los que hay una remisión de la Constitución a una regulación secundaria, por lo cual manifestó compartir lo sostenido por el señor Ministro Góngora Pimentel en cuanto a la interpretación del artículo 70 impugnado, debiendo realizar su interpretación integral.

En esos términos destacó que el artículo 75 impugnado se apega a la Constitución, pues su única diferencia con la norma general es que refiere a diputados locales, con lo cual se atiende a las particularidades de esa entidad política. Por otro lado, en cuanto al sistema de coaliciones la norma controvertida recoge el principio de equidad previsto a nivel federal otorgando a éstas el trato de un solo partido, sin afectarlas en su financiamiento y en el resto de sus prerrogativas, reconociendo que funcionan para el proceso

electoral y se desintegran una vez concluido éste, por lo que declarar la invalidez del referido sistema propiciaría inequidad en la contienda electoral.

Por lo que se refiere a los preceptos relacionados con las faltas y sanciones, la normativa impugnada reconoce que en su caso se dará parte al Instituto Federal Electoral para la determinación de las sanciones a que haya lugar. En ese tenor, reiteró que para arribar a la interpretación correcta de los preceptos impugnados es necesario distinguir lo que le corresponde al Instituto Federal Electoral, reconocido por la legislación estatal, de lo que puede ser materia de sanciones por las autoridades locales.

Finalmente el señor Ministro Franco González Salas destacó la relevancia de interpretar la Constitución de manera congruente, haciendo viable un sistema que permita al Instituto Federal Electoral cumplir con sus atribuciones.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó su conformidad con la interpretación que llevaría a considerar que *"El único facultado es el Instituto Federal Electoral"*; mientras que las legislaciones locales deben adaptarse a lo establecido en la Constitución como facultad exclusiva del Instituto Federal Electoral, debiendo tomarse en cuenta lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 104/2008, en la que se reconoció la facultad del Congreso



del Estado de Jalisco para establecer normas relativas a la asignación del tiempo que previamente concede el Instituto Federal Electoral.

Por otra parte, el señor Ministro Cossío Díaz, manifestó que el artículo 70 en su primer párrafo, contiene una declaración general copiada del artículo 41 constitucional. Agregó la relevancia de abordar el análisis de validez del artículo 70, párrafos segundo y tercero, de la normativa impugnada para, posteriormente, estar en posibilidad, de analizar los artículos 75, 76 y 83, los que se refieren a diversos aspectos, lo que permitirá definir en su momento si el legislador local puede establecer los respectivos porcentajes de distribución o si ello es parte de las atribuciones del Instituto Federal Electoral. Incluso, distinguir si las legislaturas locales pueden asignar o si ello es competencia federal, como lo propone el proyecto del señor Ministro Gudiño Pelayo. Finalmente, al analizar el artículo 83 antes referido, también se podrá definir si la autoridad local puede pautar.

Posteriormente, el señor Ministro Silva Meza comentó que el principio de certeza debe estar presente siempre en la materia electoral, de manera que no le resulta convincente la interpretación conforme que se propone, ya que el artículo 70 impugnado es categórico al disponer la necesidad de que exista un acuerdo entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral Local.

El señor Ministro Franco González Salas apoyó la propuesta del señor Ministro Cossío Díaz respecto a distinguir entre los artículos impugnados. Además, manifestó su conformidad con lo argumentado por el señor Ministro Góngora Pimentel, en el sentido de que se trata de un problema de competencias, razón por la que no aludió a un bloque de constitucionalidad.

Además, propuso acudir a lo establecido por el legislador federal considerándolo como una interpretación auténtica de la Constitución, ya que en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 65 se confiere a las autoridades locales la atribución para asignar tiempo entre los partidos políticos e incluso para establecer las pautas de conformidad con el Instituto Federal Electoral.

Por su parte, el señor Ministro Valls Hernández manifestó su apoyo a la propuesta de votación del señor Ministro Cossío Díaz.

Posteriormente, el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la consideración de los señores Ministros llevar a cabo la votación de la totalidad de las propuestas contenidas en el Considerando Séptimo del proyecto, al sustentarse la propuesta respectiva en un argumento general relativo a la invasión de la esfera

reservada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Instituto Federal Electoral. Una vez aprobada la propuesta del señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia se consultó la intención de voto de los señores Ministros, ante lo cual; siete, Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza la manifestaron a favor de la propuesta de declarar la invalidez de los artículos 68, fracción I, 69 último párrafo, 70, párrafos segundo y tercero, 72, 73, 74, 75, 76, primer y segundo párrafos, 78, 80, primer párrafo, 81, fracciones I, II y III; 82, 83, 84, 105, 113, párrafos primero, segundo y cuarto; 143, fracción VIII; 205, 310, fracción VIII, 313, fracción II y 318 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, con la salvedad de que el señor Ministro Góngora Pimentel votó por la validez del indicado 70, párrafo primero; en tanto que, cuatro: Luna Ramos, Franco González Salas, Azuela Güitrón y Presidente Ortiz Mayagoitia se manifestaron en contra de la referida propuesta y por el reconocimiento de validez de dichos preceptos.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifestó que dada la intención de voto de sólo siete Ministros a favor de declarar la invalidez de las citadas normas legales, y no haber obtenido una mayoría calificada de ocho votos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las

*Sesión Pública Núm. 35*

*Martes 17 de marzo de 2009*

Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en su momento, deberá desestimarse la acción respecto de dichas disposiciones.

A sugerencia del señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia el Tribunal Pleno acordó continuar la discusión en la próxima sesión y que el asunto y los demás continúen en lista.

Siendo las trece horas con veinte minutos el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia convocó a los señores Ministros para la Sesión Privada que se celebraría a continuación y para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves diecinueve de marzo en curso, a partir de las once horas, y levantó esta sesión.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.